CAPÍTULO I

TENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA CONTEMPORÁNEA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LA PRUEBA DIGITAL

Sergio Luis Mondragón Duarte

Docente Investigador de la Maestría en Derecho Administrativo de UNAULA. Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional y en Contratación Estatal, Magíster en Derecho Público, Doctorando en Seguridad Humana y Derecho Global. Correo electrónico: sergio.mondragondu@unaula.edu.co. <https://orcid.org/0000-0002-5189-6770>.

Juan Camilo Velásquez Rueda

Asesor de Entidades Públicas. Abogado, Especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo, Candidato a Magíster en Derecho Administrativo. Correo electrónico: juancamilovr@msn.com. <https://orcid.org/0000-0003-4275-0179>.

Leandra Lorena Prada Cruz

Docente Universitaria. Abogada y Psicóloga, Especialista en Psicología Jurídica, Magíster en Criminalística y Ciencias Forenses. Correo electrónico: leandracriminalisticaibague@gmail.com.

Resumen

La administración pública como pilar esencial de la estructura del Estado, ha evolucionado a partir de la inserción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en sus procesos, por lo que el presente escrito tuvo como objetivo principal dar a conocer las nuevas tendencias de la administración pública electrónica, desde las categorías de comercio electrónico y prueba electrónica, para su desarrollo teórico fueron abordadas las Teorías de los Sistemas de Von Bertalanffy y la Teoría de la Evolución de Charles Darwin, a través de una metodología con enfoque cualitativo, basada en el método inductivo-sistemático, que arrojó como resultado primordial el reconocimiento de la importancia que tienen los recursos electrónicos dentro de las categorías integradoras del nuevo concepto de la administración pública, que tiende a resaltar la gestión pública en el marco del uso creciente, interactivo y optimizado de las TIC, para mejorar la prestación de servicios públicos y los procesos internos de las entidades estatales.

Palabras clave: administración pública, comercio electrónico, prueba digital.

www.doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.2

TRENDS IN CONTEMPORARY ELECTRONIC PUBLIC ADMINISTRATION: A PERSPECTIVE FROM E-COMMERCE AND DIGITAL TESTING

Abstract

The public administration as an essential pillar of the structure of the State, has evolved from the insertion of new information and communication technologies (ICT) in its processes, so the main objective of this writing was to make known The new trends in electronic public administration, from the categories of electronic commerce and electronic evidence, for their theoretical development, the Von Bertalanffy Systems Theory and Charles Darwin's Theory of Evolution were approached, through a methodology with a focus qualitative, based on the inductive-systematic method, which yielded as a primary result the recognition of the importance of electronic resources within the integrating categories of the new concept of public administration, which tends to highlight public management within the framework of use increasing, interactive and optimized ICT, to improve the provision of public services and s internal processes of state entities.

Keywords: electronic commerce, electronic test, public administration.

Proyecto de investigación

La presente ponencia es producto del proyecto de investigación: “Judicialización de la Actividad Administrativa Disciplinaria en el Ordenamiento Jurídico Colombiano”, aprobado por la Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA en el año 2019.

Introducción

La Administración Pública es un componente fundamental de la organización estatal, que se concibe como la rama de las ciencias sociales que describe y explica la estructura, el propósito y la función de los órganos a los cuales el poder político ha confiado la misión del interés colectivo, como el comportamiento de los individuos y de los grupos que forman parte e intervienen en el funcionamiento de estos órganos o influyen en ellos (Gournay, 1967). No obstante, el desarrollo y la evolución de la sociedad amerita una nueva regulación de la administración pública, pues en la medida que surgen nuevas

necesidades, las autoridades públicas deben propender su satisfacción por medio de nuevas estrategias, herramientas e instrumentos que respondan a la dinámica de aquellas, lo que en la actualidad se define principalmente por el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En ese sentido, se tiene que la evolución de la administración pública ha estado condicionada por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha permitido entender que regulaciones legales como la del documento electrónico, la firma digital, el comercio electrónico, la gestión documental pública electrónica y el acceso a la información pública electrónica en general, han transformado el concepto de la administración pública, puesto que la misma se enmarca en la actualidad como “una nueva forma de gestión pública, basada en el uso interactivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (especialmente Internet), con el doble objetivo de prestar mejores servicios para ciudadanos y empresas, y mejorar los procesos internos de las organizaciones” (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 91-112).

Ante esta situación, el objetivo de la presente investigación es dar a conocer los distintos contextos en los que se desarrolla la administración pública contemporánea, a partir de las variadas regulaciones legales que se han dado en el país por el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente en lo que respecta al comercio electrónico y la prueba electrónica.

Fundamentación teórica

La presente investigación tiene como referentes para su desarrollo la Teoría de los Sistemas de Von Bertalanffy y la Teoría de la Evolución de Charles Darwin, citadas por López et al. (2006), atendiendo al contexto especial del estudio de la evolución que ameritan las organizaciones estatales.

En ese sentido, se observa que la Teoría de los Sistemas se extiende al concepto de la Administración Pública, en la medida que los sistemas estatales son complejos y requieren conocer sus características, tales como “propósitos, globalismo, entropía (grado de desorden) y homeostasis (equilibrio dinámico con respecto a entradas y salidas), así como los tipos de sistemas posibles y de sus parámetros: entradas, procesos,

salidas y retroalimentación” (López et al., 2006). De esta manera se aprecia cómo con la Teoría de los Sistemas, la concepción de las entidades públicas u organizaciones estatales es más holista, pues permite entender que al interior de ellas existen múltiples integraciones de propósitos y elementos que guardan relación e interdependencia entre sí, para lograr el cumplimiento de los fines del Estado.

Por su parte, la Teoría de la Evolución de Darwin es aplicable a esta investigación, en la medida que al estar en la “era de la información”, el mundo se encuentra en una época caracterizada por la información y los cambios, en la que las organizaciones o entidades públicas deben adecuar sus instalaciones físicas y tecnológicas, y adaptar sus procesos y procedimientos a las nuevas herramientas, instrumentos e interacciones tecnológicas, en aras de maximizar las experiencias y el aprendizaje, identificando y calificando las nuevas fuentes de conocimiento, y teniendo la capacidad de administrarlas correctamente (López et al., 2006) Por lo que solo de esta manera será posible la generación de una organización o empresa basada en el conocimiento, caracterizada por su capacidad de captar, analizar, distribuir y gestionar la información interna y transformarla en conocimiento que agregue valor a todo el quehacer de ella, (López et al., 2006), como ocurre en el caso de las administraciones de entidades u organizaciones públicas, donde se debe propiciar por la búsqueda continua del aprovechamiento del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para promover tanto la innovación como el mejoramiento de los bienes y servicios que le son ofrecidos y prestados a sus usuarios (López et al., 2006).

Metodología

El enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo (Hernández, 2014), por cuanto lo que se pretende con ella es dar a conocer los distintos contextos en los que se desarrolla la administración pública contemporánea, a partir de las distintas regulaciones legales que se han dado en el país por el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente en lo que respecta al comercio electrónico.

Igualmente, el método a aplicar para dar pleno desarrollo y alcance efectivo a la investigación, será el inductivo-sistemático, propio de las investigaciones

cualitativas (Hernández, 2014), como quiera que a partir del estudio de los conceptos de administración pública, comercio electrónico y prueba electrónica, se arrojarán resultados y conclusiones generales que permitirán dar cumplimiento al objetivo propuesto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hará una revisión de literatura derivada de la legislación, jurisprudencia y doctrina, que permita establecer a partir de fuentes documentales de información, obtenidas de bibliotecas, bases de datos y páginas web confiables (Hernández, 2014), los distintos contextos en los que se desarrolla la administración pública contemporánea, a partir de las distintas regulaciones legales que se han dado en el país por el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente en lo que respecta al comercio electrónico y la prueba electrónica.

Resultados

I. La Administración Pública Contemporánea

La Administración Pública como “componente fundamental de la organización estatal” (Gómez, 1998, p. 47), se inspira como una “disciplina científica que estudia el funcionamiento real de las administraciones públicas” (Gómez, 1998, p 27). De esta manera, como bien lo sostiene Bernard Gournay:

La Administración Pública es la rama de las ciencias sociales cuyo propósito es describir y explicar, por un lado, la estructura y tarea de los órganos a los cuales el poder político ha confiado la misión del interés colectivo, del bienestar general, y por otro, el comportamiento de los individuos y de los grupos que forman parte e intervienen en el funcionamiento de estos órganos o que influyen en ellos (1967). P?

Es así, como se avizora en muchos esquemas actuales que la administración pública propende por el interés general, el bienestar general y el desarrollo de la sociedad, desde su ámbito territorial, funcional y complejo, que impone una responsabilidad social y política bajo un régimen legal, que se salvaguarda en la subordinación que se hace del interés individual sobre el interés general en el marco de los lineamientos, las políticas, las directrices e instrucciones señaladas por una autoridad, la cual se ve avocada a

invertir de forma regulada los recursos fiscales de origen público, para satisfacer las necesidades e intereses del conglomerado social (Gómez, 1998, p. 37).

Esta situación permite visibilizar que el desarrollo y la evolución de la sociedad amerita una nueva regulación de la administración pública, pues en la medida que surgen nuevas necesidades, las autoridades públicas enmarcadas en sus gobernantes deben propender su cubrimiento por medio de nuevas estrategias, herramientas e instrumentos que respondan a la dinámica de aquellas, lo que en la actualidad se define principalmente por el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Así pues, se tiene que autores como Cárdenas y Vergara (2017), señalan que los estados modernos conciben la administración pública contemporánea en el marco del gobierno electrónico, incluso bajo diferentes denominaciones como “e-gobierno, e-governance, e-government, gobierno digital, gobierno en línea, teledministración, one-stop government, electronic government o online government” (pp. 49-90). De manera tal que, la modernización de la administración pública se da a través del uso del internet, como quiera que el funcionamiento del gobierno o del Estado en sí mismo mejora a través de la aplicación de las nuevas tecnologías, por lo que en algunos Estados como Gran Bretaña refieren a la administración pública dentro del concepto de gobierno en línea o administración electrónica oe-government (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 49-90).

En virtud de lo anterior, se tiene como acierto el definir la administración electrónica como parte o elemento integrador fundamental del concepto de la administración pública, puesto que la misma nace como “una nueva forma de gestión pública, basada en el uso interactivo de las TIC (especialmente Internet), con el doble objetivo de la prestación de mejores servicios para ciudadanos y empresas, y la mejora de los procesos internos de las organizaciones” (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 91-112).

En ese sentido, siendo concordante o coherente con el avance y la evolución del sistema social en el marco de las necesidades e intereses que la administración pública deben propiciar por garantizar o satisfacer, se tiene que:

las organizaciones públicas tienen un importante papel en esta nueva economía, facilitando su desarrollo y la inclusión social, conceptos que van unidos en esta nueva sociedad. De hecho, solo las personas con habilidades digitales podrán aprovechar todos los beneficios que la revolución de la información puede proporcionar (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 91-112).

Así pues, se puede revelar la obligación que yace o existe al interior de las entidades estatales, órganos, organismos e instituciones públicas de modernizar sus procesos desde los enfoques institucional, económico y organizacional (Gómez, 1998, pp. 67-71), con el fin de responder a las dinámicas internas y externas, que obedecen tanto al cumplimiento de procesos y procedimientos, como al funcionamiento de las instalaciones físicas y tecnológicas de las entidades, y por supuesto, a la resolución de problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales, educativas y ambientales que demanda la sociedad diariamente.

Es por ello que, la administración pública contemporánea se erige bajo acepciones como la de Comercio Electrónico, regulada por la Ley 527 de 1999; Gestión Documental Electrónica Pública regulada por la Ley 594 de 2000; y recientemente, la Información Pública Electrónica, regulada por la Ley 1712 de 2014. Es así como la Ley 527 de 1999 (a la que se hará alusión más adelante), consagró las disposiciones para la definición y reglamentación de los mensajes de datos, el comercio electrónico y la firma digital en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual estimuló el intercambio electrónico de datos de una forma más segura, adecuada y confiable, por parte de particulares y de entidades públicas (Congreso de la República, 1999).

En el caso de la Ley 594 de 2000, se puede aseverar que esta ley definió la gestión documental (Congreso de la República, 2000) como “aquel conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 193-202), lo cual permitió el tratamiento efectivo, eficiente y eficaz de la información consignada tanto en documentos electrónicos como físicos. Las carpetas ciudadanas y las autenticaciones electrónicas del Estado (Cárdenas y Vergara, 2017, pp. 203-220).

Ahora bien, en relación con la Ley 1712 de 2014, se aprecia que la transparencia y el acceso a la información pública nacional se convierten en pilares fundamentales de la administración pública, en la medida que tal normatividad obligó a todas las entidades públicas a compartir o “divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública” (Congreso de la República, 2014), de lo cual derivó la actividad inexorable de implementar los procedimientos archivísticos necesarios para garantizar la disponibilidad en el tiempo de los documentos electrónicos auténticos.

Todo lo anteriormente expuesto, demuestra que la administración pública contemporánea debe responder a los avances y a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual a su vez hace necesario que toda política del Estado esté definida y adoptada a través de instrumentos jurídicos efectivos, eficientes y eficaces, que permitan mejorar las relaciones entre las entidades públicas con sus usuarios.

II. El Comercio Electrónico y su relación con la Administración Pública

El Comercio Electrónico es una “práctica de actividades comerciales en las que se emplean procedimientos electrónicos, sean o no de comunicación a distancia” (Menéndez, 2005, p. 128), es decir, corresponde a una operación telemática que permite la realización de actividades comerciales desde cualquier parte del mundo.

De esta manera, dicha actividad no sólo cubre la esfera de los procesos de intercambio de mercancías propiamente dichos, sino también aquellas que impliquen la afectación de un derecho que se considera de naturaleza comercial, tales como los Derechos de Propiedad Intelectual –Derechos de Autor y Propiedad Industrial (Urbina, 2012, pp. 70-71).

En ese orden de ideas, la intervención de la administración pública en el contexto del comercio electrónico, está dada por la regulación estatal que amerita este último debido a la internacionalidad del Comercio Electrónico por la falta de contacto directo y unidad geográfica entre las partes que participan en la actividad comercial.

Así pues, vale la pena recordar que si bien el ordenamiento jurídico colombiano, a nivel de derecho interno, adoptó la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996¹(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 1996), mediante la Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y establece la incorporación y regulación de las respectivas entidades de certificación para validar dicha información (Corte Constitucional, 2001), es procedente aducir que la materialización de principios sobre los cuales se soportan las relaciones comerciales, como el de la autonomía privada de la voluntad; al igual que la concreción de resultados concernientes a la evolución del derecho mercantil a nivel internacional, reflejados prácticamente en la globalización del derecho negocial de las personas, denotan la importancia de la actividad reguladora estatal en estos procesos, por medio de disposiciones legales y reglamentarias al respecto.

Es así como la actividad reguladora del Comercio Electrónico por parte del Estado, encuentra su sustento en la amplia, imparable e inevitable promoción, difusión y suministro de instrumentos o herramientas digitales, reflejados a través de mensajes de datos enviados vía correo electrónico, los cuales permiten la realización de transacciones electrónicas, entre las que se encuentran la comercialización o pago de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, ofrecidos dentro de un marco de confiabilidad, seguridad y validez comercial.

Por lo tanto, si bien propuestas legislativas aceptadas para regular el Comercio Electrónico, como el mismo Derecho Internacional o la Self Regulation, pretenden suministrar variables o alternativas dirigidas hacia la obtención de una solución en los conflictos derivados de la actividad mercantil o contractual mundial, con la colaboración conjunta de normas institucionales que les permitan por medio de sus criterios de aplicación universal o uniforme, ampliar su espectro de uso, es viable afirmar que nuestro ordenamiento jurídico debe dar una observancia especial y brindar un tratamiento primordial en torno a este tema, para ofrecer una regulación sistemática del comercio electrónico, que permita integrar de forma adecuada las normas internacionales emanadas al respecto con las expedidas a nivel interno, máxime teniendo en la cuenta que ni la Ley Modelo de Comercio Internacional expedida por la CNUDMI², ni la Directiva de

¹ La Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996 fue expedida por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL en Inglés, NUDMI en español), que imparte directrices sobre el tema para unificar o garantizar el debido proceso a nivel de globalización.

² UNCITRAL-En Inglés.

Comercio Electrónico³(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2000), se han pronunciado de fondo sobre la importancia del comercio electrónico en las relaciones económicas, nacionales e internacionales.

Ante lo anterior, toda vez que al atender las amplias posibilidades de regulación normativa empleada para resolver las controversias derivadas de los contratos celebrados en virtud del Comercio Electrónico Internacional, con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas del año 2010, se debe contar con una reglamentación de nociones básicas o esenciales en el marco del conflicto contractual internacional, relacionadas con el efectivo de desarrollo de ciertos derechos como:

1. La competencia asignada a funcionarios judiciales con jurisdicción en el domicilio del demandado para resolver el conflicto, salvo en los contratos de consumo donde el juez competente será el del domicilio del consumidor.

2. El ejercicio del derecho de contradicción y/o defensa, requerida también a nivel del comercio electrónico internacional para administrar justicia.

3. La realización de diligencias y/o audiencias con base en el respeto irrogado por las normas sustanciales, procesales y procedimentales que demanda el derecho tanto interno como externo, de cada país.

4. La correcta valoración probatoria que se debe hacer de la prueba electrónica debidamente obtenida o recolectada, la cual se traduce en los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, y la información electrónica legalmente obtenida.

5. La motivación de providencias judiciales, de conformidad con los parámetros legales previstos o señalados en el ordenamiento jurídico interno, así como en los convenios, tratados, leyes modelo, guías, directrices y demás reglamentos de origen internacional, aplicables a los problemas jurídicos suscitados dentro de la contratación de bienes y servicios, llevada a cabo entre comerciantes de diferentes Estados. (Naciones Unidas, 2010).

³ Directiva de Comercio Electrónico relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

De esta manera, se aprecia cómo la regulación del comercio electrónico tanto a nivel nacional como internacional aún es insipiente, por lo que es menester en lo que respecta al Estado colombiano, que el legislador preste más atención a la reglamentación de este asunto, para garantizar más la eficiencia y eficacia de la administración pública en los procesos contractuales, sobre todo en aquellos que demandan la adquisición de bienes y servicios públicos estatales en el marco de relaciones derivadas de tratados y convenios internacionales.

III. La Prueba Digital en el marco de la Administración Pública

Las actuaciones administrativas de carácter electrónico, en el marco de la administración pública, como ocurre con los casos de los actos administrativos electrónicos, son válidas, siempre que hayan sido emanadas conforme a los procedimientos o formalidades exigidas para su emisión o manifestación.

Es por esta razón que toda actuación administrativa electrónica debe garantizar además de los requisitos básicos, como el órgano o la autoridad, la voluntad y las formalidades (Ortega, 2018); su autenticidad, integridad y disponibilidad en el documento donde se encuentre impregnada la manifestación de voluntad de la administración (Sánchez, 2014), de tal manera que la información de la administración pública consignada digitalmente debe mantenerse incólume respecto de posibles alteraciones en su contenido, fallas en su consulta instantánea o inmediata, y cambios en la fuente originaria o emisora del texto.

No obstante, de no poderse garantizar los tres criterios anteriores (autenticidad, integridad y disponibilidad) en las actuaciones administrativas electrónicas, podría cuestionarse la validez o legalidad de las mismas, por medio de pruebas, como el peritaje; lo cual a la luz de Flórez (2016), representa una herramienta valiosa para la valoración de los documentos electrónicos por parte de abogados, jueces y funcionarios administrativos, a partir de las reglas de la sana crítica (conocimientos científicos y técnicos, lógica y experiencia) (Parra, s.f.), lo cual permitirá incorporarlos dentro de cualquier proceso de manera segura y confiable.

Así pues, la evidencia digital según Cano (2010), es plena prueba dentro de un proceso, en la medida que las interacciones digitales o electrónicas, pueden ser avaladas por un perito o experto en comunicación forense, como mensajes de datos o documentos electrónicos, que se encuentran reflejados en contenidos de archivo, metadata, datos de directorio, datos de configuración, datos de logging, material forense recuperado, e interpretaciones de expertos.

En ese sentido, el Estado colombiano dando alcance efectivo al derecho fundamental de la administración de justicia ha adoptado por medio de la Ley 527 de 1999 (Congreso de la República, 1999) y la Ley 962 de 2005 (Congreso de la República, 2005)⁴, los criterios legales previstos por el ordenamiento jurídico internacional, para regular la “prueba electrónica”. Por tanto, se puede observar que los documentos electrónicos pueden ser valorados por la autoridad competente, como se dijo anteriormente, a través de los criterios de la sana crítica, para otorgarle o no validez a los mismos dentro del proceso.

De esta manera, se tiene que es un operador administrativo o judicial, dependiendo de cada caso en concreto, concederá o no valor probatorio al documento electrónico o mensaje de datos, que haya derivado o haya sido empleado en el marco de una actuación administrativa o judicial, para lo cual verificará los elementos de autenticidad, originalidad, confiabilidad, aceptación, integridad y confidencialidad que deben perpetuar al interior de aquellos.

Lo anterior, podrá hacerse a través de las figuras del indicio y el peritaje, reguladas como medios probatorios idóneos para tal efecto, en el Código General del Proceso (Congreso de la República, 2012), las cuales si bien cuentan con dificultades de costo, tiempo y especialidad de tecnología, para reconocer la validez del contenido revisado, todavía siguen siendo los únicos mecanismos eficaces con que cuentan las autoridades u órganos competentes para darle o restarle eficacia probatoria a las actuaciones administrativas electrónicas.

⁴ Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Por lo que, vale la pena afirmar que es necesario adoptar nuevos instrumentos procesales a nivel nacional e internacional que revistan de mayor validez las actuaciones públicas electrónicas, en aras de brindar u ofrecer más garantías a los operadores administrativos y judiciales en la resolución de casos concretos, donde se trate de dilucidar sobre una posible legalidad o la ilegalidad de las mismas.

Conclusiones

En relación con todos los argumentos expresados previamente, se puede afirmar que la administración pública contemporánea, a partir de la Teoría de la Evolución de Charles Darwin, debe responder a los avances y a la evolución de las técnicas de la información y la comunicación, lo cual hace a su vez necesario que toda política del Estado esté definida y adoptada a través de instrumentos jurídicos efectivos, eficientes y eficaces que permitan mejorar las relaciones entre las entidades públicas con sus usuarios.

Así mismo, en lo que respecta al comercio electrónico internacional y su relación con la administración pública, se concluye que la regulación del comercio electrónico tanto a nivel nacional como internacional aún es insipiente, por lo que es menester en lo que respecta al Estado colombiano, que el legislador preste más atención a la reglamentación de este asunto, en cumplimiento a la Teoría de los Sistemas propuesta por Von Bertalanffy, para garantizar más la eficiencia y eficacia de la administración pública en los procesos contractuales, sobre todo en aquellos que demandan la adquisición de bienes y servicios públicos estatales en el marco de relaciones derivadas de tratados y convenios internacionales.

Finalmente, se observa que en materia de la prueba electrónica dentro del contexto de una actuación administrativa en Colombia, se concederá valor probatorio al documento electrónico o mensaje de datos, que derivado de una actividad pública, goce de los elementos de autenticidad, originalidad, confiabilidad, aceptación, integridad y confidencialidad en su interior. Sin embargo, falta acoger nuevos y mejores instrumentos procesales tanto a nivel nacional como internacional que validen los contenidos de las actuaciones públicas electrónicas, para dotar a los operadores administrativos y judiciales de más herramientas que le permitan impartir decisiones adecuadas al respecto, en el marco de la recta y eficaz administración de justicia.

Referencias bibliográficas

- Cano, J. (2010). *El Peritaje Informático y la Evidencia Digital en Colombia, Retos y Propuestas*. Universidad de los Andes.
- Cárdenas, E., y Vergara, C. (2017). *Administración pública electrónica: hacia el procedimiento administrativo electrónico*. Universidad del Rosario.
- Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. (1996). *Ley Modelo de Comercio Electrónico*. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1996) Ley Modelo de Comercio Electrónico Internacional. www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf
- Congreso de la República. (21 de Agosto de 1999). *Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
- Congreso de la República. (14 de Julio de 2000). *Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones*. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15049_documento.pdf
- Congreso de la República. (6 de Septiembre de 2005). *Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
- Congreso de la República. (12 de Julio de 2012). *Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

- Congreso de la República. (6 de Marzo de 2014). *Ley 1712 de 2014*. “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”. <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf>
- Corte Constitucional. (8 de Agosto de 2001). *Sentencia C-831 de 2001*. Obtenido de República de Colombia. Corte Constitucional. Senh<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-831-01.htm>.
- Flórez, G. D., Montenegro, D., & Bernal, D. (2016) *Evidencia Digital, Distribución Musical y Derecho de Consumo*. <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14378/4/Evidencia-digital-distribucion-musical-y-derecho-de-consumo.pdf>.
- Gómez, C. (1998). *Administración Pública Contemporánea*. Mc Graw Hill.
- Gournay, B. (1967). *Administración Pública*. Presses Universidad de Francia.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill.
- López, M., Arias, L., y Rave, S. N. (2006). *Las Organizaciones y la Evolución Administrativa*. Scientia Et Technica, XII(31), 147-152.
- Menéndez, J. C. (2005). *El Contrato Vía Internet-Prólogo de Umberto Breccia*. Barcelona: J.M. Bosch Editor.
- Naciones Unidas. (Febrero de 2010). *Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías*. <https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf>.
- Ortega, L. (2018) *El Acto Administrativo en los Procesos y Procedimientos*. <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/el-acto-administrativo-en-los-procesos-y-procedimiento.pdf>.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (8 de Junio de 2000). *Directiva 2000/31/CE*. Obtenido de Directiva sobre el Comercio Electrónico: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2000/31/CE del de 8 de junio de 2000 (Directiva sobre el comercio electrhttp://convelia.com/wp-content/uploads/2011/05/DIRECTIVA-COMERCIO-ELECTRONICO.pdf

Parra, J. (s.f.) *Razonamiento Judicial en Materia Probatoria*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Sánchez, M. (2014). *Eficacia y Validez del Acto Administrativo Electrónico “Una Perspectiva en el Derecho Comparado de Colombia y España”*. <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/eficacia-validez-digital.pdf>.

Urbina, E. (2012). *Los Contratos en la Era Global*. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Ibáñez.